

■ En esta edición:

- Condena de la violencia fascista en Venezuela
- Redes transnacionales y acción nacional: El movimiento anti-minería en El Salvador.
- "El capital está imponiendo el agronegocio como la única forma de producir".

■ Ecobreves:

- Ángel Ibarra: "Francisco Flores privatizó la gestión de emergencia en los terremotos"
- La elección de un nuevo gobierno reconfiguraría la lucha ambiental en el salvador
- Sánchez Cerén se compromete a prohibir la minería en El Salvador.

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
Colonia Miramonte, Calle Colima #22, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2260-1480 - ext- 27.

Sitio Web: www.unes.org.sv

Facebook: [uneselsalvador](https://www.facebook.com/uneselsalvador).

Twitter: [@UNES_EISalvador](https://twitter.com/UNES_EISalvador)

Compilación y revisión de textos: Presidente de UNES, Ángel Ibarra.

Diseño: Comunicaciones UNES, Brenda Platero.

Condena de la violencia fascista en Venezuela

Pronunciamiento

■ **Por: Capítulo salvadoreño de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en defensa de la Humanidad.**

El miércoles 12 de febrero, la derecha venezolana mostró al mundo, una vez más, hasta dónde puede llegar para desestabilizar el proceso de construcción del socialismo por la vía democrática. Dos personas asesinadas y unas 23 heridas fueron el saldo de la violencia de los que han anunciado, en repetidas ocasiones, que no respetarán los mecanismos democráticos ni la legalidad para conseguir sus fines.

La guerra de la derecha contra el Presidente Nicolás Maduro y la Venezuela Bolivariana es ya un hecho, no podemos seguir ignorándolo ni se vale ver hacia otro lado. Este es el tiempo de las definiciones, y las personas que constituimos el Capítulo Salvadoreño de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad queremos decir al mundo que Venezuela no está sola en esta lucha, y a nuestros hermanos venezolanos les enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad.

Asimismo, es importante aclarar que los hechos de violencia del 12 de febrero no son sino la culminación de un plan cuidadosamente orquestado por la oposición irresponsable y fascista de Venezuela, con el apoyo de la derecha internacional. La negativa a aceptar los resultados electorales que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, la guerra económica, la desinformación de los medios nacionales e internacionales y la campaña sucia han sido constantes, y es posible ver una gran similitud entre lo que sucedió en abril de 2002 —antes, durante y después del Golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez Frías— y lo que vimos ahora.

Por todo esto, los miembros salvadoreños de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad:



- Condenamos enérgicamente la guerra fascista contra el pueblo de Venezuela, sus instituciones democráticas y su gobierno legítimo.
- Exhortamos al pueblo salvadoreño a que no se deje engañar por la falsa información difundida por los medios y agencias de prensa cuya agenda es un arma contra la Revolución Bolivariana. Animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a que se informen activa y objetivamente sobre los hechos, recurriendo a los medios de comunicación alternativos, redes sociales y fuentes de información comprometidas con la comunicación de la verdad sobre Venezuela.
- Respaldamos al Presidente Nicolás Maduro, la continuación del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, y la construcción de la Patria Socialista y Bolivariana.

San Salvador, 14 de febrero de 2014

Redes transnacionales y acción nacional: El movimiento anti-minería en El Salvador



**El Faro/ Resumen: Ellen Moodie.
Traducción: Stephanie Aubry.**

"La capacidad del movimiento [salvadoreño anti-minería] de crear una amplia red que trascendía la tradicional división ideológica en el país fue fundamental en la lucha por lograr una moratoria minera" dice Rose Spalding, catedrática de ciencias políticas en la Universidad de DePaul, en un capítulo publicado recientemente".

Rose Spalding analiza el proceso por el cual una red de organizaciones salvadoreñas empleó sus conexiones con diversos aliados transnacionales, mientras conformaba una amplia y heterogénea coalición en oposición al avance de la extracción de oro. Spalding utiliza fuentes primarias y entrevistas realizadas en El Salvador, Washington, D.C. y Chicago, entre los años 2004 y 2012. El capítulo forma parte de una más amplia colección de estudios compilada por Eduardo Silva, que trata de la intersección entre el activismo transnacional y los movimientos sociales nacionales en varios países latinoamericanos, incluyendo Brasil, Perú, Bolivia, México y Argentina.

El estudio de Spalding enfatiza el carácter multisectorial

del movimiento anti-minería en El Salvador, y la naturaleza "horizontal" o "lateral" de las asociaciones que el movimiento estableció con sus aliados transnacionales. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, formada en 2005, reunió una serie de organizaciones de diferentes regiones geográficas y sectores sociales en El Salvador. En la base había varias organizaciones comunitarias de municipios de Cabañas y Chalatenango que están ubicados en el "Cinturón de Oro," una zona identificada por las empresas mineras como rica en recursos y propicia a la inversión minera. Preocupadas por asuntos como el desplazamiento interno y el acceso al agua, estas organizaciones comunitarias se aliaron con organizaciones ambientales y centros de investigación a nivel nacional para construir un frente nacional contra la minería. Esta red se expandió considerablemente en 2007, cuando la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), bajo el liderazgo del arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, emitió un pronunciamiento: "Cuidemos la Casa de Todos." En este documento, el liderazgo de la Iglesia Católica concluyó que los riesgos de contaminación y daño eran tales que no debería permitirse la minería de metales en El Salvador.

Spalding constata que cada segmento de la coalición anti-minería en El Salvador creó una serie de alianzas internacionales, y que utilizó estas asociaciones como una fuente de información y recursos. Al nivel local, las comunidades del "cinturón de oro" reforzaron sus relaciones ya existentes con activistas comunitarios en Honduras, algunas de las cuales se remontaban a la época de la guerra civil, cuando miles de desplazados se dispersaron a lo largo de la frontera para huir a los

campos de refugiados. La extracción de oro avanzó más rápidamente en Honduras que en El Salvador, y esto permitió que los activistas comunitarios documentaran los daños asociados con la industria en dicho país. Debido a estas semejanzas, y gracias a sus contrapartes, los activistas salvadoreños se enteraron de que el crecimiento en el empleo asociado con el desarrollo minero era moderado y temporal, y que los costos ambientales eran serios y perdurables.

A medida que los grupos locales se fueron aliando con organizaciones ambientales en El Salvador, el marco por el cual se percibía el debate sobre la minería destacaba cada vez más los riesgos ambientales que conlleva la industria. En este país tan densamente poblado, en donde ya se estaban intensificando los costos económicos y sociales de los desastres naturales y los problemas de calidad del agua, estos temas fomentaron la unión entre los movimientos. Se reforzaron las preocupaciones ambientales mediante los vínculos con movimientos de resistencia al neoliberalismo en la región mesoamericana, tales como el Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos, un foro transregional iniciado en México en 2001. Se establecieron otros vínculos con una comunidad internacional de investigación que comenzaba a documentar los daños de minería. Varios equipos de investigación y activistas en El Salvador se aliaron con expertos técnicos en el extranjero, algunos de los cuales se ubicaban en los Estados Unidos y Canadá, quienes proporcionaban un cúmulo de conocimiento especializado y experiencia académica relacionados con los daños ambientales asociados con la extracción de oro.

Varios líderes religiosos salvadoreños también se basaban en los flujos transnacionales de información, a medida que llamaban la atención sobre este asunto. La declaración de los arzobispos salvadoreños en 2007 confirmó las preocupaciones previamente expresadas por arzobispos centroamericanos en Honduras y Guatemala, en donde varios oficiales católicos desempeñaban un papel destacado en la oposición a la minería. El comunicado de los arzobispos salvadoreños también anticipó los pronunciamientos relativos al medio ambiente que surgieron del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en una reunión de 160 arzobispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en 2007.

Cuando la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica amplió sus iniciativas de acercamiento al público, una red de aliados internacionales y organizaciones de solidaridad, incluyendo Oxfam-America, CISPES, Sister Cities, y SHARE, prestó su apoyo. Estas organizaciones, que Spalding describe como, “domesticating international non-governmental organizations (INGOs),” se caracterizaban por su presencia en El Salvador a largo

plazo, y por su bien establecido trabajo en relación con el desarrollo inclusivo y el empoderamiento local. Estos aliados internacionales proporcionaron apoyo financiero y visibilidad internacional a la emergente campaña anti-minería en El Salvador, y ayudaron con la divulgación mediática, las encuestas de opinión pública, y la campaña de educación pública. Spalding confirma que, a pesar de la importancia de las asociaciones externas, el liderazgo del movimiento permanecía bajo el control de una red de activistas salvadoreños estrechamente unida. El liderazgo de la Mesa Nacional desempeñó un papel fundamental en la elección de sus aliados transnacionales, y en la adaptación de marcos específicos al contexto salvadoreño, incluyendo el distintivo llamamiento para la prohibición nacional de la minería metálica.

Spalding concluye que la capacidad del movimiento de crear una amplia red que trascendía la tradicional división ideológica en el país fue fundamental en la lucha por lograr una moratoria minera. El éxito obtenido se debió a la particular coyuntura política por la cual surgió el debate sobre la minería. Cuando el previamente dominante liderazgo de ARENA se enfrentó a un creciente desafío político en el período previo a las elecciones presidenciales de 2009, se fracturó el partido, y esto llevó a Tony Saca a retirar su apoyo al desarrollo minero. En este momento decisivo, el anterior partido hegemónico – que había estado firmemente comprometido a abrir la economía a la inversión extranjera, a reducir el pago de regalías, y a proporcionar extensas garantías de inversión – perdió el poder. La victoria del candidato del FMLN, Mauricio Funes, en 2009 permitió la consolidación de una nueva política hacia la minería, incluyendo una moratoria minera.

En este momento, el asunto polémico se desplazó de un nivel nacional a un nivel internacional, cuando las corporaciones mineras Pacific Rim y Commerce Group interpusieron una demanda contra el gobierno de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)). Esta transición exigió una reconfiguración de la red internacional de la coalición anti-minería. En esta fase, la red salvadoreña desarrolló nuevos vínculos con, lo que Spalding califica de, “power node INGOS.” Estas organizaciones, basadas en Washington, D.C. y Ottawa, poseían conocimientos especializados de los procesos de toma de decisiones en los centros internacionales de poder. Ellas facilitaron la organización de campañas de divulgación pública en los Estados Unidos y Canadá, y proporcionaron asistencia estratégica y legal a la Mesa Nacional a medida que preparaba su caso para presentarlo ante una audiencia internacional.

"El capital está imponiendo el agronegocio como la única forma de producir"

Joao Pedro Stedile / El camino a la constituyente en Brasil



Joana Tavares

Brasil nunca tuvo un programa de reforma agraria que en realidad se propusiera democratizar el acceso a la tierra y entregar la tierra a los campesinos pobres. Así sintetiza la situación actual del campo João Pedro Stedile, integrante de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Según Stedile, de acuerdo con la correlación de fuerzas, "a veces avanzamos y conseguimos asentamientos y en otros períodos el capital avanza e impide que hayan expropiaciones. Y esta es la situación actual".

Frente a este escenario, del 10 al 14 de febrero, más de 15.000 militantes del MST se reunirán en su Sexto Congreso, en Brasilia. Tras 30 años de fundación del MST, la configuración del campo de Brasil apunta a la agudización de las contradicciones sociales que se acumulan como una deuda histórica. Ante esta situación adversa, los últimos dos años nos pasamos debatiendo con nuestra base, nuestra militancia y construimos la idea de la necesidad de un programa de reforma agraria popular", dice Stédile. En este programa se incluyó la necesidad de hacer amplias expropiaciones de los latifundios más grandes, empezando por las empresas extranjeras, agrega el dirigente.

En esta entrevista, Stédile habla sobre la situación actual de la reforma agraria y sobre los principales desafíos que la clase trabajadora tiene en este año. "A pesar de los avances que hubo en los últimos diez años en relación con el neoliberalismo, los trabajadores aún enfrentan graves problemas, que afectan también

a la juventud", afirma. Él cree que las movilizaciones, a más de ser bienvenidas, son necesarias para seguir cambiando el país.

Brasil de Fato: ¿Cuál es la situación de la reforma agraria en el país actualmente?

João Pedro Stedile.- Brasil en realidad nunca tuvo un programa de reforma agraria que se propusiera democratizar el acceso a la tierra y entregar la tierra a los pobres del campo. Entonces, de acuerdo con la correlación de fuerzas, a veces avanzamos y conseguimos asentamientos y en otros períodos el capital avanza e impide que haya expropiaciones. Y esta es la situación actual. No tenemos reforma agraria, e incluso los procesos de conquista de nuevos asentamientos, están paralizados. Y eso se debe a que hay una especulación en los precios de los commodities agrícolas, que incrementó el lucro de los hacendados y disparó el precio de la tierra a las nubes. El capital está imponiendo el agronegocio como la única forma de producir. Y se completa con el gobierno de Dilma, que está hegemonizado por el agronegocio. Aquellos que defienden la reforma agraria en el gobierno son una minoría. Y lo que es peor, hay una incompetencia administrativa del INCRA impresionante, que no puede resolver los problemas mínimos, incluso de los que ya están asentados.

¿Cómo impactarían los cambios proyectados por el MST en el campo en las personas que viven en las ciudades?

Ante esta situación adversa, los últimos dos años nos

pasamos debatiendo con nuestra base, nuestra militancia y construimos la idea de la necesidad de un programa de reforma agraria popular. Que represente cambios necesarios para todas las personas y no sólo para los campesinos sin tierra. Y en nuestro programa pusimos la necesidad de hacer amplias expropiaciones de los latifundios más grandes, empezando por las empresas extranjeras. Tenemos que dar prioridad a la producción de alimentos. Necesitamos producir sin agrotóxicos para que la gente de la ciudad tenga salud. Tenemos que adoptar la agroecología como una nueva matriz de producción en equilibrio con la naturaleza. Tenemos que instalar agro industrias en forma cooperativa, para dar empleo a la juventud rural, detener el éxodo y distribuir la renta. Y por último tenemos que democratizar el acceso a la escuela en todos los niveles. Esta es, en esencia, nuestra propuesta de reforma agraria.



Recientemente estuvo en la Academia Pontificia de las Ciencias, en el Vaticano, invitado por el Papa Francisco para discutir el problema del hambre mundial. ¿Qué impresiones tiene de ese encuentro?

Causó sorpresa a todos, pues por primera vez el Vaticano convocó a dos movimientos sociales: al MST y al movimiento de cartoneros (recolectores de materiales reciclables) de Argentina, para debatir con los obispos, intelectuales y científicos que forman parte de la Academia, cual es la causa para que haya pobres, excluidos y tantos problemas económicos. Expusimos nuestros puntos de vista sobre el estado actual del capitalismo financiero e internacional, que está dominando el mundo y es el principal responsable. Las 300 mayores empresas del mundo controlan el 60 % de toda la riqueza. El uno por ciento de los ricos controla la mitad de toda la riqueza de la humanidad. Sin combatir este sistema, no vamos a tener una sociedad más igualitaria, más justa y democrática. El seminario tendrá ahora ciertamente otros seguimientos, con otras

reuniones convocadas por el Papa Francisco, que a todos nos está sorprendiendo.

El MST fue el principal movimiento social en Brasil en las últimas décadas. Ahora surge la juventud como el principal actor social ¿Cuál es su opinión acerca de los actuales movimientos de la juventud?

Las movilizaciones de la juventud, en cualquier sociedad, son siempre una especie de termómetro que indica la temperatura de la indignación de toda la sociedad. Y aquí no fue diferente. A pesar de los avances de los últimos diez años en relación con el neoliberalismo, los trabajadores todavía enfrentan serios problemas, que también afectan a la juventud. Y la juventud se tomó la calle para decir, en nombre de todos nosotros, que necesitamos cambios sociales. Cambios en el régimen político, que no representa a nadie. Cambios en la política económica. Y más. El Estado y el poder público atendiendo las necesidades del pueblo en materia de salud, educación y transporte público de calidad.

¿Está pensando el MST dialogar o articularse con esa juventud?

En todas las movilizaciones, buscamos participar con nuestra militancia, a pesar de que nuestra base social está lejos de las capitales. Seguimos alentando a que la juventud se organice y se movilice. Y al mismo tiempo, contribuimos a la construcción de plenarias estatales y nacionales de todos los movimientos sociales, que incluyan a todos los sectores, desde el movimiento sindical hasta las pastorales, para discutir el rumbo del país y la necesidad de la reforma política.

¿Cree usted que las movilizaciones de junio protagonizadas por esos jóvenes fueron una sorpresa por la magnitud e impacto que tuvieron?

Fueron sorpresa por la forma y rapidez que sucedieron. Pero todos los militantes sociales sabían que los problemas que el pueblo está enfrentando en las grandes ciudades estaban aumentando y latentes. La situación del transporte público es uno de ellos, se pierde horas en el tráfico y es caro. Mientras el gobierno exonera el IPI (Impuesto a los Productos Industrializados) y fomenta el transporte individual, que las multinacionales automovilísticas agradecen. El servicio de salud pública es una vergüenza. Y eso que por lo menos desbloqueó el Programa Más Médicos, que es una buena cosa. Y en la educación, tenemos problemas serios, desde elevadas tasas de analfabetismo, que afectan a 18 millones de trabajadores adultos, hasta el hecho de que el 88 % de la juventud en edad universitaria, no puede entrar a la universidad. Por otro lado, la política institucional en Brasil ha sido secuestrada por contri-

buyentes de campaña, que transforman las elecciones en rehenes del capital. Y el pueblo, la juventud, ya no se sienten representados en los parlamentarios, en el sistema político. Así que días más, días menos, esos problemas aparecerían. Y aparecieron en el mejor lugar posible: ¡en las calles! Que es el mejor lugar para que la juventud practique la democracia.

¿Cuál es el balance de las movilizaciones de junio para la lucha política en el país?

En términos de conquistas reales, el balance todavía es pequeño, porque solo pudieron parar el aumento de las tarifas. Pero el saldo político es fantástico. Volvió a colocar la política en las calles. Volvió a colocar el debate de los cambios necesarios. Y puso en agenda la necesidad de la reforma política y de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Y el proceso está aún en curso y tiende a aumentar.



En el balance de 2013, los movimientos constataron algunos reveses en la política económica nacional. ¿Cuál fue la razón de ese retroceso?

La política económica del gobierno federal es uno de los ejes centrales de la lucha de clases de la sociedad brasileña. Porque es a través de ella que las clases dividen la riqueza producida todos los días por los trabajadores. Y hay una presión permanente de los bancos y las grandes empresas para devorar los recursos públicos, en la forma de intereses. En la forma de los préstamos del BNDES, en la forma de enmiendas parlamentarias, en la forma de exención de impuestos. Y del lado de los trabajadores, tenemos que luchar porque estos recursos, que son públicos, que son de todo el pueblo, se destinen preferentemente a las inversiones en educación, salud, reforma agraria, y el transporte público en las principales ciudades. Y en esta lucha, creo que en 2013, la clase obrera salió perdiendo. Los bancos engulleron 280 mil millones de reales del tesoro en intereses. El Banco Central, dominado por los bancos, aumentó la tasa de interés. El ciudadano común, el comercio y la industria pagan tasas de interés que van del 40% al 144 % por año. Esto es una afrenta. Y el gobierno se quedó adminis-

trando, sin valor ni fuerza para detener el poder económico, porque parte del gobierno está impregnado por estos intereses.

La derecha y la izquierda están apostando a que las movilizaciones retornen durante la Copa del Mundo ¿Hay el riesgo de que las movilizaciones, que son un signo de la voluntad de cambio, apoyen a las fuerzas conservadoras? ¿Esto puede ser usado en el juego electoral?

Las movilizaciones masivas siempre ayudan a impulsar el debate político en la sociedad. La derecha brasileña no tiene ninguna base social, ni discurso ni propuesta para movilizar a millones de personas. Porque sería movilizar contra los intereses del pueblo. Las movilizaciones, a más de bienvenidas, son necesarias para seguir cambiando el país, para tener más Estado al servicio del pueblo. Más recursos para la educación, la salud. Los que tienen miedo del pueblo es porque se encuentran lejos de sus intereses. Ningún cambio social ha ocurrido en la historia de la humanidad, sin que haya habido movilización popular. Ningún cambio se produjo por la “voluntad generosa” de algún gobernante o gurú. En cuanto al calendario, me inclino porque las movilizaciones de calle comiencen después, pues en el período de realización de la Copa van a crear confusión en la cabeza de la gente que quiere ver la Copa del Mundo, y pueden limitar las movilizaciones como si solo fuesen protestas por el dinero gastado en las obras. El dinero que se gastó en estadios, unos 8 mil millones de dólares, por supuesto que pudo ser mejor invertido, sin embargo, representa apenas dos semanas del volumen de recursos que el gobierno pasa a los bancos. Así que, cada dos semanas tenemos una Copa del tesoro nacional para los bancos. Y estos son nuestros principales enemigos, que tenemos que denunciarlos y derrotarlos, dentro y fuera del gobierno.

¿Qué esperar de las elecciones de 2014?

Personalmente, creo que no vamos a tener grandes cambios. Ni en los electos ni en las propuestas que los electos defienden. Por lo tanto, los cambios reales ya no dependen del calendario electoral, dependerán de la capacidad de la clase trabajadora para construir un programa unitario que incorpore las medidas que la sociedad necesita para poder resolver los problemas cotidianos del pueblo.

¿El MST y otros movimientos sociales pretenden lanzar alguna bandera política y llevar a cabo movilizaciones en este año?

Ya están situadas en la calle, desde la segunda mitad del año pasado. Participamos en un amplio frente po-

pular, que incluye a la CNBB, OAB, ABI, la CUT y los movimientos populares, para juntos luchar por la reforma política. Una reforma política que cambie las reglas del juego, devuelva al pueblo el derecho de elegir a sus verdaderos representantes, cambie la correlación de fuerzas en la sociedad y abra las puertas para que se ejecuten otras reformas necesarias: la reforma urbana, la reforma agraria, la reforma educativa, garantizando el 10% del PIB para la educación, la ampliación de recursos para la salud, y el control de las tasas de interés y el superávit primario.



¿A qué otras reivindicaciones principales apostaría para el 2014?

Este es el salto político que nosotros, los movimientos populares, tenemos que dar. A más de las agendas específicas de reivindicaciones, que cada sector social continuará impulsando para satisfacer las necesidades de su base, ahora es fundamental construir una unidad programática en torno a los temas políticos. Unidad para hacer una gran minga nacional y hacer trabajo de base para discutir con la gente qué cambios políticos queremos. Y a partir de ese debate, organizar un Plebiscito Popular en la semana del 7 de septiembre, para que la gente vote sobre la posibilidad de convocar o no a una Asamblea Constituyente, elegida de manera soberana, bajo otras reglas, y exclusiva para llevar a cabo la reforma política del país. Espero que podamos movilizar a millones de brasileños en esta misión, y así unir fuerzas para presionar a los tres poderes de la República para convocar a la Asamblea Constituyente en 2015.



Ángel Ibarra: “Francisco Flores privatizó la gestión de emergencia en los terremotos”

Diario Co-Latino

Ángel Ibarra, Presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), afirmó que para los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001, el ex presidente Francisco Flores “privatizó la gestión de emergencia y junto con la empresa privada manejaron de una manera oscura los donativos millonarios de la comunidad internacional”.

“Yo creo que son más de \$10 millones, porque a Paco Flores le tocó manejar la reconstrucción que dejó el huracán Mitch, donde El Salvador solicitó en Estocolmo \$1,200 millones.

También para los terremotos de 2001 presentó demandas por \$800 millones a la comunidad internacional. Habrá que investigar si ese dinero vino o no, pero todo esto es de lo más oscuro que ha habido en este país”, dijo el representante de la UNES durante la entrevista Agenda Ciudadana que transmite Televisión de El Salvador (TVES) a las 8 de la noche.

El ex presidente Francisco Flores no ha rendido cuentas de un millonario donativo que recibió de Taiwán, el cual dijo que habría solicitado para ayudar a las víctimas del deslave en la colonia Las Colinas de Santa Tecla. “Yo recuerdo que pasaron censo en el que dijeron que nos entregarían ayuda, pero nunca recibimos nada, y la mayoría de los residentes, incluso los afectados directos de Las Colinas, no recibieron ayuda alguna”, aseguró Lourdes de Campos, integrante de la Junta Directiva de la colonia Las Colinas, quien también participó en la entrevista Agenda Ciudadana.

Diferentes organizaciones sociales han exigido una investigación a profundidad y que deduzca responsabilidades sobre el presunto acto de corrupción por parte de uno de los presidentes honorarios del partido ARENA y asesor del candidato presidencial Norman Quijano.

“Lamento que se hayan aprovechado del dolor y el sufrimiento de las víctimas y que la ayuda internacional no llegara directamente a las personas que en verdad la necesitaban, y que aún la necesitan, porque aún existen afectados que no han resuelto el problema de vivienda”, afirmó Lourdes de Campos.

Cabe destacar que en materia de prevención de riesgo, Ángel Ibarra manifestó que todo ese monto millonario “desaparecido” podría haber sido utilizado para realizar estudios y diseñar estrategias de prevención ante posibles desastres.

La elección de un nuevo gobierno reconfiguraría la lucha ambiental en el salvador

Hablaelesalvador.com

A escaso un mes de las elecciones presidenciales, los desafíos que debe asumir el nuevo gobierno en materia ambiental generan expectativas en diversos círculos sociales de la población en El Salvador.

Y la lucha del movimiento social tendría que recomponerse ante los resultados de las elecciones presidenciales independientemente de la victoria de un partido de izquierda o de derecha, de cara a los retos sociales y ambientales que el nuevo gobierno debe resolver.

Sin embargo, las organizaciones sociales esperan que se produzca una continuidad de un gobierno de izquierda pero a la vez, existen dudas razonables que su segundo mandato sea consecuente con las políticas públicas en favor de la población y el medio ambiente, considerando que se han visto pocos avances en este ámbito, comentan algunas personas representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales que fueron entrevistadas al respecto.

“Que mantenga la visión de los derechos humanos de las personas, que la calidad de vida de las personas depende de las buenas condiciones que se genere en el medio ambiente, buena calidad de agua, que no exista contaminación dentro de la tierra, buena calidad de oxígeno como parte integral del abordaje de la gestión de riesgos”, comenta Sandra Ascencio, representante de la Oficina Justicia, Paz e Integración de la Orden Frailes Menores (JPIC).

“Esperamos que con el futuro gobierno exista una preocupación por el medio ambiente que vaya acorde con el sentir de las comunidades, no solo con el tema del agua, sino también con la cuestión de las empresas mineras que están obstinadas en seguir sus proyectos de explotación y eso afectaría a las comunidades, contaminaría los recursos”, manifiesta José Isabel Mimbrenño representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) en el Departamento de Chalatenango.



“Creemos como jóvenes que entre los retos que tiene el nuevo gobierno, es que se debe implementar políticas de Estado como la Ley General de Aguas, la Ley Anti Minera en El Salvador y Transfronteriza, menguar los impactos del cambio climático que garantice un ambiente sano para la juventud”, manifiesta Oscar Alemán, representante de Activistas de El Salvador

“Como mujer creo que en la agenda del futuro gobernante se deben incorporar temas vitales como la Ley General de Aguas, el proyecto de ley contra la explotación minera, y esto no se ha visto reflejado en las propuestas de los políticos, y que es una debilidad en esta contienda electoral que estos temas de interés nacional no son retomados”, alega Vidalina Morales, de la comunidad de Santa Marta, Departamento de Cabañas.

“Un llamado a estar atentos y preparados ante el nuevo escenario que se produzca después de las elecciones presidenciales considerando que existen experiencias que gobiernos progresistas de izquierda en Latinoamérica están en confrontación directa con los ambientalistas en sus respectivos países, por proyectos extractivistas que afectan a comunidades, declara Pedro Cabezas, representante de la Coalición Internacional de Aliados contra la Minería que es un grupo de organizaciones basadas en los Estados Unidos, Canadá y Australia.

Sánchez Cerén se compromete a prohibir la minería en El Salvador

Por Alfredo Carías /Contra-Punto

Compromiso simbólico en San Isidro, Cabañas, lugar clave de la lucha contra compañías mineras.

El candidato a la presidencia por el partido FMLN Salvador Sánchez Cerén se comprometió públicamente con las ambientalistas y la población de Cabañas a no permitir la actividad de la industria minera en el país, durante su gira electoral por la zona Paracentral este fin de semana pasado.

El compromiso del aspirante de izquierda es simbólico por la importancia que represento haberlo hecho en el municipio donde la comunidad ha resistido férreamente contra la explotación de la minera metálica que ha cobrado la vida de 5 activistas ambientales.

"La amenaza de la extracción metálica es una amenaza de la vida. Se va a destruir nuestras vidas", fueron parte de las palabras del postulante presidencial Salvador Sánchez Cerén a la militancia y público que se dio cita al evento desarrollado en la ciudad de San Isidro, Cabañas.

Las reacciones al compromiso no se hicieron esperar

"Primero la mesa tiene una lucha desde hace varios años porque se proteja el medio ambiente contra la destrucción que ocasionan las empresas mineras, por ello celebramos que la fórmula presidencial del FMLN se haya comprometido públicamente, y esperamos que el compromiso que mantuvo el gobierno de Mauricio Funes, se impulse la aprobación de una ley que prohíba la exploración y explotación minera. Lo que queremos como mesa en este nuevo gobierno es que se legisle en relación a prohibir la exploración y explotación minera en El Salvador y, con ello evitar nuevas demandas que pueden significar erogación de recursos para pagar condenas por mantener una legislación a favor de la destrucción del medio ambiente", señaló Marcos Gálvez, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.



El compromiso del Ejecutivo sin ley que la respalde

El actual gobierno a cargo del Presidente Mauricio Funes firmó una carta compromiso que está en desacuerdo con la actividad minera metálica cuando fue su campaña electoral en el 2009, esta promesa electoral no ha trascendido desde ese periodo, hasta traducirse en una legislación que garantice la negativa total de la explotación, debido a que en la presente legislatura no existe correlación de fuerzas partidaria que provoque que la balanza se incline a favor de la prohibición.

A pesar que desde hace 8 años han existido demandas sociales como las expresadas por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, que ha presentado en dos ocasiones (2006 y 2013) propuestas de ley al respecto, las cuales se mantienen archivadas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, acumulando polvo ante la falta de voluntad política por parte de las fracciones de derecha en no querer estudiar y discutir ambas propuestas de ley.

El Ejecutivo solo propuso una ley de suspensión de procesos administrativos para la exploración y explotación minera, que significa que no otorgarán permisos a las empresas mineras, mientras no se generen las condiciones en el país, que aseguren que su actividad no provocará perjuicios sociales y ambientales como ha pasado en otros países como Guatemala y Honduras, donde las comunidades han sufrido contaminación de sus fuentes de agua y daños a la salud.



unes

www.unes.org.sv



@UNES_ElSalvador

UNESLSALVADOR